



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ejecutivo
EJECUTANTE	Mauricio Cano Posada
EJECUTADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05- 012-2017-00850
TEMA	Liquidación del crédito. Intereses moratorios
DECISIÓN	Revoca

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, dentro del proceso ejecutivo promovido por **MAURICIO CANO POSADA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-**, con radicado 05-001-31-05-012-2017-00850, procede a conocer del recurso de apelación formulado por la parte ejecutada.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **N° 218**, aprobada por los integrantes de la Sala.

• **AUTO RECURRIDO:**

Por auto del 6 de mayo de 2022, el Juzgado Decimosegundo Laboral del Circuito de Medellín resolvió modificar la liquidación del crédito efectuada por la parte ejecutante. Como consecuencia, aprobó la liquidación del crédito actualizada y efectuada por el Despacho, ordenándole a Colpensiones a pagar al ejecutante como capital, la diferencia adeudada por los intereses de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, por el valor \$29.452.791. Condenó en costas procesales a la ejecutada. Negó la solicitud de entrega de título.

• **APELACIÓN:**

La parte ejecutada, como sustento de su inconformidad, expresó textualmente:

“Verificada, la demanda ejecutiva presentada por la parte ejecutante, y notificada a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, dentro del acápite de pretensiones se indica lo siguientes:

“Con base a los anteriores hechos solicito se libre mandamiento de pago a favor del señor MAURICIO CANO POSADA, a cargo de COLPENSIONES, por los siguientes conceptos:

PRIMERO: Que se ejecute a COLPENSIONES al pago de las costas reconocidas en el auto del 07 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín, por valor de \$6.160.000.

SEGUNDO: Que se ejecute a COLPENSIONES por el pago de los respectivos intereses por el no pago de la totalidad de sentencia judicial, intereses estos que deben de ser a partir de la radicación de la cuenta de cobro efectuada el día 25 de julio de 2014, hasta la fecha en la cual se cancele las costas, o en subsidio la indexación de las sumas adeudadas,

TERCERO: Que se condene a COLPENSIONES al pago de las costas.”

La anterior situación, es ratificada por la parte ejecutante cuando presenta liquidación al crédito, memorial en el cual indica que las sumas adeudadas son las costas del proceso ordinario por la suma de \$6.160.000 y las costas del proceso ejecutivo por valor de \$431.200.

Razón por la cual no se entiende por parte de por qué el Despacho en mandamiento de pago del 30 de octubre del 2017, se manifiesta que el ejecutante solicita la diferencia que resulte de lo ordenado pagar por intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, y situación que no es cierta, pues como se transcribió anteriormente, en la demanda ejecutiva se solicitó el pago de las costas del proceso ordinario, y que sobre este valor se condenara al pago de intereses moratorios o indexación, por su pago tardío, por lo que no era dable librar mandamiento de pago por sumas que no fueron peticionadas.

Por lo anterior, se deberá dejar sin efecto el auto del 30 de octubre del 2017, por el cual se libró mandamiento de pago, pero solo en cuanto ordenó el pago de la diferencia que resulte de lo ordenado pagar por intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y lo subsiguientes, en caso de no prosperar dicha solicitud, solicito al Honorable Tribunal Superior de Medellín, revise la liquidación efectuada por el Despacho”

- **ALEGATOS:**

Las partes no presentaron alegatos.

CONSIDERACIONES:

En sentencia del 8 de febrero de 2011, el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Decimocuarto Laboral del Circuito de Medellín condenó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, al pago de \$23.048.953 por concepto de diferencias en la reliquidación de la pensión de vejez desde el 1° de marzo de 2007 hasta el 31 de enero de 2011 y al pago de la indexación de dicho valor; esta decisión fue adicionada por sentencia del 13 de diciembre de 2013 proferida por la Sala Quinta Laboral de Descongestión del Tribunal Superior

de Medellín, en la que se condenó a Colpensiones al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 9 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2009 por el retardo en el pago de la pensión de vejez en la suma de \$35.580.536,⁴⁸.

El señor Mauricio Cano Posada demanda ejecutivamente a Colpensiones por los siguientes conceptos: *“Que se ejecute a Colpensiones al pago de las costas reconocidas en el Auto del día 07 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado 12° Laboral del Circuito de Medellín, por valor de \$ 6’160.000” y “Que se ejecute a Colpensiones por el pago de los respectivos intereses moratorios por el no pago de la totalidad de la sentencia judicial, intereses estos que deben de ser a partir de la radicación de la cuenta de cobro, efectuada el día 25 de julio de 2014, hasta la fecha en la cual se cancele las costas, o en subsidio la indexación de las sumas adeudadas”*

Por auto del 30 de octubre de 2017, el Juzgado Decimosegundo Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago en favor del señor Mauricio Cano Posada y en contra de Colpensiones por la diferencia que resulte de lo ordenado a pagar por concepto intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y lo pagado, así como por la suma de \$6.160.000 como capital correspondiente a las costas procesales del trámite ordinario; mediante auto del 8 de marzo de 2019 se declaró no probadas las excepciones formuladas por la ejecutada y como consecuencia ordenó seguir adelante con la ejecución; finalmente, mediante auto del 6 de mayo de 2022 liquidó el crédito, ordenándole a Colpensiones pagar la suma de \$29.452.791 por concepto de la diferencia adeudada por los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Atendiendo a la apelación formulada por Colpensiones, el problema jurídico a resolver se centrará en determinar si Colpensiones está en la obligación de pagar la suma de \$29.452.791, producto de la liquidación del crédito realizada por el juzgado del conocimiento.

En esta instancia se hace necesario advertir que el proceso ejecutivo parte de la existencia de la certeza sobre el derecho reclamado, la cual debe estar contenida en un título que preste mérito ejecutivo, que debe cumplir unas condiciones esenciales, a saber: a) que haga prueba por sí mismo sin necesidad de complementarlo con algún reconocimiento, cotejo o

autenticación; b) que mediante el mismo se pruebe la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida, lícita y exigible en el momento en que se inicia el juicio; y c) que ofrezca plena certeza frente a la titularidad del crédito – acreedor- y ante quien puede ser exigido – deudor-.

Los requisitos de obligación expresa, clara y exigible, merecen entenderse en su cabal significado.

Obligación expresa. Esto significa declarar precisamente lo que se quiere dar a entender. El documento entonces debe contener una obligación expresa, es decir, debe consignarse en él, el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado.

Obligación clara. La claridad hace relación especialmente a su inteligibilidad, es decir que no sea equívoca ni confusa y que únicamente pueda entenderse en un solo sentido.

Obligación exigible. La exigibilidad significa que la obligación pueda pedirse, cobrarse o demandarse. La obligación es exigible cuando válidamente puede pedirse o demandarse su cumplimiento al deudor. El plazo y la condición constituyen dos hechos que impiden la exigibilidad. El *plazo* es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. La *condición* es un acontecimiento futuro que puede suceder o no y suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se produzca el advenimiento del hecho.

Ahora, la sentencia objeto de recaudo contempla una obligación expresa por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, pues de forma concreta la Sala de Descongestión de este Tribunal ordenó el pago de \$35.580.536,48, sin condicionar la obligación a que fuera reajustada en un futuro.

La Corte Constitucional de vieja data se ha pronunciado acerca de los momentos que confluyen en la formación del juicio que formula la autoridad judicial, indicando sobre la parte resolutive que, es aquella que resuelve la controversia que originó el proceso. Así se pronunció en sentencia C-548 de 1997:

“Esos momentos son: el cognoscitivo, que supone el conocimiento cierto de los hechos y de las demás circunstancias relevantes del conflicto y la determinación de las normas válidas para la solución del mismo; el valorativo, que consiste en la evaluación de tales hechos a la luz de las normas que se juzgan pertinentes para ello, pues precisamente se refieren, en abstracto, a las conductas que el juez ha identificado en concreto; y el decisorio, que se manifiesta en la parte resolutive del fallo, cuya finalidad es resolver la controversia que originó el proceso, o hacer las declaraciones que se demandan. Estos momentos se desarrollan a través de las etapas que determinan las leyes procesales”

Atendiendo a lo anterior, a juicio de esta Sala puede exigirse por la vía ejecutiva el reclamo por concepto de interés moratorios del artículo 141 de 1993, pero únicamente en los términos señalados en la sentencia.

Pues bien, son deberes del juez realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso, según lo establecido en el numeral 12 del artículo 42 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de normas al procedimiento laboral.

Y, respecto al control de legalidad en los procesos ejecutivos, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial, en sentencia de tutela 46034 del 8 de febrero de 2017, en la que indicó:

(...)
Al respecto, el hecho de que en el proceso se haya librado mandamiento de pago, y que posteriormente el juez advirtiera la inexistencia del título base de la ejecución, es un aspecto que no desborda la legalidad de la decisión ni constituye un quebranto a las prerrogativas de las partes en litigio, comoquiera «que en tratándose de títulos ejecutivos, es deber del fallador examinar la plena configuración de sus requisitos, de tal suerte que si no se percata oportunamente, esto es, para librar la orden de apremio o mediante excepción de parte, se impone la revisión de las falencias que puedan desvirtuarlo, antes de proferir el fallo correspondiente» , que fue lo que ocurrió en este asunto.
(...)

Mediante resolución GNR 27083 del 6 de febrero de 2015, Colpensiones dio cumplimiento al fallo judicial, pagando las siguientes sumas y conceptos:

Liquidación retroactivo	
Mesadas	\$24,882,110
Mesadas adicionales	\$2,068,446
Indexación	\$2,727,856
Intereses de mora	\$35,580,536
Descuentos en salud	\$5,579,968

Pagos ordenados sentencia	\$23,048,953
Valor para pagar	\$82,727,933

El juzgado instancia liquidó los intereses moratorios hasta el momento en que Colpensiones expidió la mencionada resolución; sin embargo, se desprende de lo anterior que la accionada pagó la obligación por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 en los términos señalados por la Sala de Descongestión Laboral de este Tribunal en sentencia del 13 de diciembre de 2013, nótese que la condena versó sobre una suma única por valor de \$35.580.536, sin que esta se viera condicionada a que deba liquidarse a futuro.

Obsérvese además que en la demanda ejecutiva no se solicita el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, toda vez que aquellos solicitados, se infiere, son los contemplados en el artículo 1617 del Código Civil, ya que se solicitan estos a partir de la radicación de la cuenta de cobro y hasta la fecha en la cual se cancele las costas.

Por lo dicho, esta Sala del Tribunal procede a realizar el control de legalidad frente al auto que liquidó el crédito, pues no debió librar mandamiento de pago por un concepto que no fue solicitado y que además fue cancelado con anterioridad a la interposición de la demanda de ejecución. Razón por la cual, la providencia objeto de apelación merece ser **REVOCADA** en tal sentido.

En esta instancia no se causaron costas procesales.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,**

RESUELVE:

Se **REVOCA** el numeral segundo del auto recurrido en apelación de fecha y procedencia conocida, en lo relacionado a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Como consecuencia se declara que la obligación por tal concepto se encuentra satisfecha.

En esta instancia no se causaron costas procesales.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 146 del 19 de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>